La FIDH demanda al gobierno del Ecuador el cese de la represión.

Las organizaciones de derechos humanos reunidas en el 42 congreso de la Federación internacional de derechos humanos, expresan su preocupación por la serie de violaciones reportadas desde Ecuador, en el marco del paro nacional último.

La FIDH denuncia que el Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia Social emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 191, el 27 de octubre del 2025, mientras se desarrolla este Congreso, dispone que a las organizaciones sociales que intervengan directa o indirectamente en actividades definidas por el gobierno como contrarias a los proyectos mineros legalmente constituidos, serán suspendidas por 4 años. Este reglamento atenta directamente contra el trabajo de defensa de derechos en contextos extractivos mineros de las organizaciones ecuatorianas, entre ellas las 3 ligas de Ecuador, y pone en riesgo nuestra existencia jurídica.
Por otro lado, según las organizaciones ecuatorianas miembros de la FIDH, durante los 31 días que duró el paro convocado por el movimiento indígena, se produjeron 369 eventos de persecución política, 329 víctimas contabilizadas, 123 acciones de represión, 2 allanamientos ilegales, 2 centros educativos militarizados, 70 actos de acoso financiero, 40 personas lesionadas, según datos recogidos por 9 organizaciones sociales en el Ecuador. (https://www.instagram.com/p/DQN6cIYjaQP/?igsh=MTc3d3VpdjVzeXNxbQ%3D%3D&img_index=1)

Además, según datos de la Alianza de organizaciones los Derechos Humanos se registran 206 detenciones arbitrarias y tres personas fallecidas. Estos datos demuestran la violencia ejercida por el gobierno de Daniel Noboa, que busca imponer un régimen regresivo en materia de derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.

Paralelamente el gobierno nacional implementó leyes para cortar la libertad de asociación, y ordenó el cierre de las cuentas bancarias de activistas, organizaciones sociales y de derechos humanos e inició procesos injustificados por asociación y enriquecimiento ilícito.

La FIDH demanda al gobierno del Ecuador el cese de la represión, exige garantice los derechos de las personas procesadas injustamente bajo acusaciones de terrorismo, y facilite las investigaciones del caso para establecer las responsabilidades por las personas fallecidas y cesar la persecución a organizaciones y dirigentes sociales.

La FIDH se solidariza con el pueblo del Ecuador, las organizaciones sociales y los defensores y esperamos que el diálogo sean los mecanismos que prevalezcan en la resolución de conflictos sociales en el país. La libertad de organización y el derecho a la resistencia son pilares de los derechos fundamentales.